

RARR-ANH-DJ N° 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

RESOLUCION ADMINISTRATIVA RARR-ANH-DJ No. 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El recurso de revocatoria interpuesto por la Planta Distribuidora de GLP "AGROGAS PAILON" (Distribuidora) cursante de fs. 39 a 42 de obrados, en contra de la Resolución Administrativa ANH N° 3327/2013 de 12 de noviembre de 2013 (RA 3327/2013), cursante de fs. 30 a 36 de obrados, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sus antecedentes, las leyes y preceptos legales cuya contravención se acusa, y:

CONSIDERANDO:

Que en fecha 03 de febrero de 2012 se realizó control y verificación en camión de la Distribuidora, conforme consta en la Planilla de Inspección Camiones de Distribución de GLP en Garrafas PIC DGLP N° 003495 que cursa a fs. 6 de obrados, el mismo que fue firmado por Edilberto Bruno con C.I. 3278907 SC, en consecuencia el Informe REGSCZ 106/2012 de 18 de febrero de 2012 que cursa de fs. 2 a fs. 6, consideró el hecho que en dicha inspección se encontró que el interno N° 9 se encontraba transportando bolsas de harina de soya, además de no contar con las facturas, por lo que recomendó su correspondiente procesamiento.

Que en mérito a la citada Planilla e Informe mediante Auto de 05 de noviembre de 2012, cursante de fs. 7 a fs. 10, la ANH formuló cargos en contra de la Distribuidora *"por ser presunta responsable de no operar el sistema de acuerdo a las normas y dispositivos de seguridad, conducta contravencional que se encuentra prevista y sancionada en el inciso a) del Art. 73 Reglamento para Construcción y Operación de Plantas de Distribución de GLP en Garrafas aprobado mediante Decreto Supremo N° 24721 de 23 de julio de 1997."*

, modificado por artículo 2 del D.S. N° 26821 de 25 de octubre de 2002." Dicho Auto fue notificado el 27 de marzo de 2012.

Que mediante la RA 3327/2013, la ANH resolvió:

PRIMERO.- Declarar **PROBADO** el cargo formulado mediante Auto de fecha 05 de noviembre de 2012, contra la Empresa Planta Distribuidora de GLP "AGROGAS PAILON" (...) por *No operar el Sistema de acuerdo a las normas y dispositivos de seguridad establecidos, conducta contravencional que se encuentra tipificada en el inc. a) del Art. 73 Reglamento de Construcción y Operación de Plantas Distribuidoras de GLP en garrafas aprobado mediante D.S. N° 24721, del 23 de julio de 1997.*

SEGUNDO.- Imponer a la Empresa Planta Distribuidora de GLP "AGROGAS PAILON", una multa de Bs.6.939,52 (Seis Mil Novecientos Treinta y Nueve 52/100 Bolivianos) equivalente a Un (01) día de comisión de ventas, calculado sobre el volumen comercializado el mes de enero de 2012."

CONSIDERANDO:

Que la Distribuidora presentó recurso de revocatoria en contra de la RA 3327/2013, por lo que mediante Decreto de 08 de junio de 2015 cursante a fs. 43 de obrados, se admitió el recurso en cuanto hubiere lugar en derecho y se dio apertura al término probatorio, el mismo que fue clausurado mediante Decreto de 18 de diciembre de 2015 a fs. 45 de obrados.

Página, 1/5

RARR-ANH-DJ N° 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

CONSIDERANDO:

Que entrando al análisis de los elementos substanciales, los argumentos principales expuestos por la Distribuidora en recurso de revocatoria, se analizan a continuación los siguientes aspectos jurídicos fundamentales:

La Distribuidora acusa la RA 3327/2013 de falta de motivación e incongruencia con los antecedentes del proceso, de acuerdo a lo siguiente: *"De la lectura de la Resolución motivo de impugnación se tiene que no existe congruencia entre esta y los antecedentes probatorios, que corresponden al presente proceso administrativo, por haber incurrido la Autoridad Administrativa en incorrecta valoración del Informe REGSCZ 106/2011, que refiere "Transporte de productos ajenos en la Distribución de GLP", y que conforme menciona la N.B.-441 (Mayo 2004), numeral 8; establece con claridad; para aquellos vehículos de transporte y distribución que se encuentren en servicio. Aspecto fundamentado como argumento de defensa, mediante memorial de fecha 13 de diciembre del 2012; que no fue considerado para efectos pertinentes en el injusto Auto de Cargo, ahora impugnado. (...)*

En este sentido no existe valoración de acuerdo a la sana crítica, toda vez que de este tenor únicamente se puede corroborar que el camión distribuidor estaba fuera de servicio, sin transportar ni comercializar GLP, que de todas formas cumplía con todas las exigencias de seguridad.

En el informe citado, en ningún momento se afirma que se hubiese encontrado al camión con garrafas y con otros productos ajenos a su distribución. (...)

Si la Autoridad Administrativa hubiese valorado correctamente y conforme a las reglas de la sana crítica la documental aportada, NO hubiese llegado a la conclusión errada, contenida en la resolución impugnada."

1. En vista al agravio expuesto por la Distribuidora corresponde analizar si la determinación del regulador se enmarcó en las disposiciones aplicables al caso, y en resguardo de los principios y garantías que rigen el procedimiento administrativo sancionador y el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública.

El debido proceso está contemplado como una garantía jurisdiccional, cuando en el art. 117 de la CPE, señala que: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...". En el mismo sentido garantista el parágrafo II del art. 115 de la CPE establece: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones".

La garantía del debido proceso ha sido definida por el Tribunal Constitucional como "...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SC N° 418/2000-R y N° 1276/2001-R). Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales; en materia penal comprende un conjunto de garantías mínimas que han sido consagrados como los derechos del procesado en los arts. 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica y 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos... SC 0119/2003-R de 28 de enero.

Página, 2/5

RARR-ANH-DJ N° 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

Abog. Sergio Ortueta Ascarrunz
JEFE UNIDAD LEGAL DE RECURSOS - D.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

La Jurisprudencia Constitucional aclaró los alcances del debido proceso en relación a la motivación o fundamentación de las resoluciones, así SC 016/2014 S3 de 5 de noviembre de 2014 manifestó: *"Por su parte, a través de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, el Tribunal Constitucional aclaró los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, así señalando que: "...es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".* (subrayado añadido)

La Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 (Ley 2341) preceptúa lo siguiente

Abog. Mónica Ayo Cárceles
PROFESIONAL EN RECURSOS DE REVOCATORIA a.
DIRECCIÓN JURÍDICA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Artículo 4° "(Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La Actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso."

Artículo 74° "(Principio de Presunción de Inocencia).- En concordancia con la prescripción constitucional, se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo."

El artículo 28 de la Ley N° 2341 establece entre los elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: "b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable". ...e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo..."

En este sentido, el inciso d) del artículo 30 de la Ley N° 2341 establece: "Los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando: ...d) Deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa".

En concordancia con lo anterior el artículo 8, párrafo I del D.S. N° 27172 preceptúa lo siguiente: "Las resoluciones... decidirán de manera expresa y precisa las cuestiones planteadas y serán fundamentadas en cuanto a su objeto en los hechos, las pruebas y las razones de derecho que les dan sustento".

Del precepto constitucional citado y la normativa administrativa citada se tiene que la presunción de inocencia y el derecho a la defensa son derechos constitucionales fundamentales y rigen en nuestro procedimiento administrativo, en tal sentido la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341) en su artículo 74 prevé como principio propio el de la presunción de inocencia y el debido proceso.

Por lo tanto, el cumplimiento de estas garantías y la aplicación del principio del debido proceso implican que nadie puede ser sancionado administrativamente sin antes haber sido sometido a un debido proceso, ello implica que los administrados tiene el derecho a ser oídos dentro del proceso, derecho de exponer sus pretensiones y defensas, ofrecer y

Página, 3/5

RARR-ANH-DJ N° 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

producir pruebas pertinentes, presentar alegatos, y obtener en definitiva resoluciones fundamentadas que consideren aquella defensa.

1.1. Respecto al agravio que ocupa nuestro análisis expuesto en el recurso de revocatoria de la Distribuidora, se constata en el expediente administrativo que ya fue planteado como defensa en el proceso de instancia a través del memorial presentado el 13 de diciembre de 2012 (fs. 12) y ratificado en el memorial de 10 de abril de 2013 (fs. 24), en el primero de ellos alega en defensa lo siguiente:

“Tercero.- Como bien refiere la planilla de inspección con Pre Impreso N° 003495, en el puto 3, establece: “NO TIENEN GARRAFAS, NI VACIAS”, situación que acredita el hecho de no estar en servicio y por ende también justifica el hecho de “NO TENER TALONARIO DE FACTURAS”.

Tercero.- Considérese que el informe y la mala apropiación de la supuesta transgresión a la normativa citada en el Informe Técnico y el cuestionado Auto de Cargo, se refiere a no operar el sistema de acuerdo a normas y dispositivos de seguridad, Sin embargo al respecto, se observa que EL MEDIO DE TRANSPORTE, NO ESTABA OPERANDO y caso paradójico se emite el auto de cargo, sin observar la misma planilla, que en sus registros “CLARA Y CONSISTENTEMENTE SEÑALA Y EXPRESA QUE CON REFERENCIA AL CONTROL DEL VEHICULO, QE SI CUENTA CON LEYENDAS, LETREROS, EXTINTOR BOTIQUIN, etc.” por lo tanto que normas de seguridad se entrarían vulnerando sino está en servicio, no transporta, ni comercializa garrafas, en ese preciso momento.”

Por lo que corresponde, a través de la revisión de la RA 3327/2013, constatar la valoración que hubiere merecido este argumento de defensa de la Distribuidora en el acto administrativo definitivo del proceso de instancia.

La Resolución que nos ocupa se limita a referirse a uno de los argumento de defensa de la Distribuidora, el relativo al artículo 31 del Reglamento aprobado con D.S. N° 27172, que fue planteado también en su memorial de respuesta a la formulación de Cargos. Sin embargo omite el argumento en particular arriba citado que ocupa nuestro análisis, no habiendo merecido ninguna valoración o análisis al respecto.

Por todo lo citado, ante una omisión de pronunciamiento no es posible hacer un control de legalidad, no es posible determinar si existen razones fundadas en los aspectos técnicos o si bien la valoración se ajusta a derecho, precisamente porque no existe valoración alguna respecto a este argumento en el proceso de instancia.

Por todo lo expuesto, en tanto la RA 3327/2013 no ha considerado el argumento particular del cual se hace cita en párrafos anteriores que además hace al fondo del asunto que se pretende dilucidar en el proceso de instancia, ello contraviene lo dispuesto en el ordenamiento jurídico administrativo en cuanto a los elementos esenciales causa, motivo, así como el fundamento (art.28 inciso b) y e) de la Ley 2341), afectando de esta manera el derecho a la defensa que se tornaría insuficiente para asegurar la vigencia del debido proceso en la presente causa, lo cual constituye una violación a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y además al inciso c) artículo 4 y artículo 74 de la Ley 2341 que aseguran a los administrados la presunción de inocencia y el debido proceso.

Siendo lo analizado suficiente para una fundamentada toma de decisión en la presente resolución, no corresponde que esta Agencia Nacional de Hidrocarburos se pronuncie sobre otras consideraciones de orden legal expresadas por la recurrente.

Página, 4/5

RARR-ANH-DJ N° 0197/2015
La Paz, 23 de diciembre de 2015

CONSIDERANDO:

Que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, que determinó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitió la Resolución Administrativa SSDH No. 0474/2009 de 6 de mayo de 2009 y la Resolución Administrativa ANH No. 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo Interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio de las facultades y atribuciones que la ley le confiere, conforme a lo dispuesto por el inciso i) del artículo 10 de la Ley 1600, y conforme a lo dispuesto por el artículo 89 del D.S. 27172,

RESUELVE:

ÚNICO.- Aceptar el recurso de revocatoria interpuesto por la Planta Distribuidora de GLP en Garrafas "AGROGAS PAILON" revocando la Resolución Administrativa ANH N° 3327/2013 de 12 de noviembre de 2013, de conformidad a lo establecido por el inciso b), parágrafo II del artículo 89 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante D.S. N° 27172 de 15 de septiembre de 2003, debiendo emitirse una nueva resolución administrativa de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del citado Reglamento, bajo los criterios de legitimidad establecidos en la presente resolución administrativa.

Notifíquese mediante cédula.

Ing. Gary Medrano Villamor.MBA.
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Sandra Leyton Vela
DIRECTORA JURIDICA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS